Señor(a) :

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN (REPARTO)

E. S. D.

Demandante: GERARDO DAZA MUÑOZ

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

M. Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

NORMAN ADRIAN GRANJA GARCÉS, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Popayán, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.061.741.302 de Popayán, portador de la tarjeta profesional No. 227.906 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado de la parte demandante dentro del presente asunto, respetuosamente acudo a su Despacho para instaurar **DEMANDA ADMINISTRATIVA LABORAL** a través del medio de control **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**, con citación y audiencia del Agente del Ministerio Público, de conformidad con lo siguiente:

I. DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES.

Parte demandante:

Lo es el señor **GERARDO DAZA MUÑOZ**, mayor y vecino de Bolívar Cauca, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.022.513 de Bolívar, quien se encuentra representado para estos efectos por el Suscrito Abogado.

Parte demandada:

Lo es la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP**, a través de su Representante Legal.

Se deberá dar traslado a la **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO**, para que esta determine sobre su participación en el presente asunto.

II. DECLARACIONES O CONDENAS.

Ruego comedidamente al Despacho, que previo el trámite correspondiente, mediante sentencia favorable se dicten las siguientes o similares declaraciones:

PRIMERA.- Se declare la nulidad de los actos administrativos de contenido particular y concreto contenidos en las Resoluciones No. RDP 042022 del 10 de septiembre de 2013 y RDP 053941 del 22 de noviembre de 2013 mediante las cuales se negó a mi poderdante el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho.

SEGUNDA.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, la entidad demandada deberá:

Expedir el acto administrativo mediante el cual se reconozca y pague la correspondiente pensión de sobrevivientes a que tiene derecho el señor Gerardo Daza con ocasión del fallecimiento de su hermana Nilda Daza de Caicedo ocurrido el día 5 de enero de 2013, en monto del 100% de la mesada percibida por ésta, esto es, la suma de UN MILLON OCHENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON TREINTRA Y OCHO CENTAVOS M/Cte (\$1.081.053,38).

Reconocer y pagar las mesadas pensionales a que tiene derecho desde el momento en que debió hacerse la sustitución pensional, es decir, a partir del día 6 de enero de 2013 hasta la fecha en que se expido el correspondiente acto administrativo de reconocimiento, y en adelante mientras éstas se cancelen, suma que al momento de presentación de la demanda asciende al monto de CUARENTA Y SIETE MILLONES

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/Cte (\$47.387.000,98).

TERCERA.- Sobre las sumas que resulten a favor de mi poderdante, la Entidad deberá reconocer, liquidar y pagar la indexación, aplicando la formula enseñada por el H. Consejo de Estado¹:

$$R = Rh \times \frac{\text{INDICE FINAL}}{\text{INDICE INICIAL}}$$

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo que ha dejado de percibir a por cada mesada pensional, por el guarismo que resulta al dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente a la fecha en que quede ejecutoriado el acto administrativo que reconoce y ordena el pago, por el índice inicial vigente para la fecha en que debió realizarse el pago.

CUARTA.- Las sumas de dinero reconocidas devengarán intereses corrientes bancarios de mora desde la fecha de ejecutoria de la sentencia.

QUINTA.- Las entidades darán cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

III. HECHOS.

3.1. La señora Nilda Daza Muñoz (q.e.p.d.) y el señor Gerardo Daza Muñoz, son hermanos entre sí, sostenían una relación de hermandad basada en el respeto, cariño y apoyo mutuo, en especial de parte de la señora Nilda Daza hacia su hermano, puesto que

¹ CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONCENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN "B" Consejero ponente: JESUS MARIA LEMOS BUSTAMANTE, Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil seis (2006). Radicación número: 76001-23-31-000-2002-02566-01 (2391-04), actor: OFELIA GONZALEZ DE HOYOS. Demandado: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

éste es inválido y no puede valerse por sí mismo para sostener los gastos que necesita para su congrua subsistencia.

3.1.1. La señora Nilda Daza Muñoz contrajo matrimonio con el señor JOSE FREIDER CAICEDO GONZALES el 25 de julio de 1996, no obstante, el mencionado señor Caicedo falleció el 08 de octubre de 2011 sin que hubiesen dejado descendencia.

3.2. A través de la Resolución No. 17031 del 19 de abril de 2006 le fue reconocida a la señora Nilda Daza de Caicedo una pensión en cuantía de \$590.450,91 efectiva a partir del 27 de septiembre de 2003, misma que fue reliquidada a través de la Resolución No. 32682 del 21 de julio de 2008, elevando la cuantía a la suma de \$690.260,08.

3.3. El señor Gerardo Daza Muñoz, padece de EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS IDIOPÁTICOS GENERALIZADOS razón por la cual la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca emitió dictamen No. 16670513 del 27 de mayo de 2013 mediante el cual le determina un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 51,87%, con fecha de estructuración del 21 de noviembre de 1973.

3.4. Habida cuenta de la condición médica del señor Gerardo Daza, la señora Nilda Daza era quien sufragaba los gastos de aquel correspondientes a alimentación, vestido, vivienda, salud y todo en cuanto éste necesitara, ya que los unían lazos fraternales muy sólidos sumados al hecho de que la causante no tenía hijos y su esposo falleció en el año 2011.

3.5. Lastimosamente el día 05 de enero de 2013, fallece la señora Nilda Daza de Caicedo de conformidad con el Registro Civil de Defunción que se aporta con la presente demanda.

3.6. Con ocasión de la muerte de su hermana, El 8 de julio de 2013 mi poderdante presentó solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de conformidad con el artículo 47 de

la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

3.7. La solicitud fue resuelta a través de la Resolución No. RDP 042022 del 10 de septiembre de 2013 negando el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por las siguientes consideraciones:

"Que del estudio jurídico de los documentos aportados por el señor GERARDO DAZA MUÑOZ y de los documentos que obran en la historia laboral del pensionado, se concluye que el peticionario en calidad de hermano invalido, no cumple con los requisitos previstos en los artículos 38 de la Ley 100 de 1993 y 12 y 13 de la ley 797 de 2003, toda vez que si bien es cierto este allego (sic) declaración juramentada de dependencia económica con el causante, también lo es que el dictamen de invalidez No. 16670513 de la Junta de Calificación de Invalidez de VALLE DEL CAUCA de fecha 27 de mayo de 2013, no indica que requiera de la ayuda de un tercero." (Se resalta).

3.8. En contra de la anterior decisión, oportunamente se interpuso recurso de apelación que fuere resuelto mediante Resolución No. RDP 053941 del 22 de noviembre de 2013 y en la que se expone:

"Que obra constancia de Matrimonio celebrado entre la causante y el señor JOSE FREIDER CAICEDO GONZALEZ con CC No. 10517232 de Popayán, el día 25 de julio de 1976, constancia sin nota marginal de divorcio y/o cesación de efectos civiles de matrimonio religioso

Que el Código Civil, establece:

DE LOS ALIMENTOS QUE SE DEBEN POR LEY A CIERTAS PERSONAS.

ARTÍCULO 411. Se deben alimentos:

(...)

Que por lo tanto el señor GERARDO DAZA MUÑOZ ya identificado, en calidad de hermano invalido, NO cumple con los requisitos previstos en la Ley 797 de 2003 **y es su CONYUGE la que tiene la obligación de alimentos y no la causante quien era su hermana,** de conformidad con el artículo 411 del código civil.

Que por lo tanto quedo (sic) desvirtuada claramente la dependencia económica entre el solicitante y la causante, que exige la Ley 797 de 2003 razón por la cual se confirma la Resolución No. RDP 42022 del 10 de septiembre de 2013". (Se resalta).

3.9. Los anteriores actos administrativos están viciados de nulidad, el primero porque pretende añadir un requisito adicional al exigido por las normas aplicables al caso para efectos de acceder a la pensión de sobrevivientes y el segundo porque confunde una situación fáctica como lo es el matrimonio de la causante con su Esposo y el estado civil del solicitante de la pensión de sobrevivientes, el cual es soltero, concluyendo que a éste le debe alimentos su cónyuge -sin tenerla- y no su hermana.

3.10. Por tratarse de un proceso administrativo laboral en el que se pretende el reconocimiento de una prestación de tracto sucesivo, no existe caducidad de la presente acción así como tampoco debe agotarse el requisito de la conciliación prejudicial por tratarse de un derecho irrenunciable.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

A la causante se le reconoció la pensión gracia en año 2006 a través de la Resolución No. 17031.

Al momento de su fallecimiento, esto es, 5 de enero de 2013 a la causante no le sobrevive cónyuge o compañero permanente, padres o hijos con derecho.

El señor Gerardo Daza es hermano de la causante, se encuentra en estado de invalidez de conformidad con el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 y dependía económicamente de esta, razones suficientes para que le sea reconocida la Pensión de sobrevivientes.

Por lo anterior, consideramos que se encuentran violadas las siguientes normas:

4.1. NORMAS VIOLADAS.

De la Constitución Política, los artículos 1, 2°, 13, 25, 48 y 53.

La Ley 100 de 1993, en sus artículos 1, 2, 3, 38, 41, 46, 47 y 48.

La Ley 797 de 2003, en sus artículos 12 y 13.

Las demás que el juzgador encuentre vulneradas con ocasión de los hechos relatados.

4.2. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

4.2.1. VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN COMO CAUSAL DE NULIDAD.

Las disposiciones constitucionales que se relacionan en primer lugar establecen las condiciones para el ejercicio del poder público por parte de la administración pública; de donde surge la exigencia, para las autoridades, de proteger a las personas en su vida honra y bienes a fin de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los

particulares, además, está la consideración del trato igualitario, la protección al trabajo, a la familia y a la seguridad social.

Las Resoluciones censuradas, expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, quebrantan en forma manifiesta tales preceptos, toda vez que desconoce abiertamente el trato igualitario y la protección que imponen las normas de rango constitucional.

La denominada pensión de sobrevivientes que reclama el actor, es una especie dentro del género de los derechos de previsión social, ya que con ella se pretende proteger a la familia del pensionado de las necesidades generadas por su muerte, debido pues, a la privación de los ingresos con los cuales atendía a la subsistencia del grupo.

Recogiendo las palabras de la doctrina, la principal finalidad de la referida pensión, es la de que quien pierde al ser que lo sostenía en vida, tenga la manera de poder seguir atendiendo a su subsistencia y a los de sus hijos menores y a los inválidos y demás personas que señala la Ley. No se trata de un derecho herencial; es una prestación social que se encamina a proteger a las personas que dependían económicamente del jubilado fallecido o de quien tenía derecho a esa prestación.

ARTÍCULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Por lo tanto, la fundamentalidad del derecho al respeto de la dignidad humana, es principio constitucional sobre el cual se

construye el Estado Social de Derecho y como tal tiene una difuminación jurídica en el cuerpo constitucional.

La consideración de la persona humana y de su dignidad es el presupuesto y nuevo elemento central del nuevo Estado Social de Derecho, la persona humana en su manifestación individual y colectiva es contemplada en la constitución como fuente suprema y última de toda autoridad y titular de derechos inalienables para cuya protección se crea el Estado.

El **ARTÍCULO 2** de la Constitución en su segundo inciso consagra "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares."

El acto administrativo cuya nulidad se solicita infringe esta norma, por cuanto, como bien se ha dicho, el Estado debe proteger y atender en manera especial a todas las personas incluso a las que por su condición de debilidad manifiesta, económica, física y mental requieran de esa tutela. Esta situación, transforma la obligación genérica del Estado frente a las personas débiles o marginadas en obligación específica y, hace nacer el correlativo derecho a exigir las prestaciones por parte de las personas, en quienes concurren las circunstancias de debilidad manifiesta. El Estado Social de Derecho impone la solución señalada ante los casos de manifiesta injusticia y vulneración de la dignidad humana, cuando ha sido el mismo Estado el primero en eludir sus compromisos.

ARTÍCULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

No constituye el Acto Administrativo acusado un claro ejemplo de esa especial protección. Todo lo contrario, la desconoce de manera abierta u arbitraria, toda vez que el derecho al trabajo va ineludiblemente ligado a la seguridad social; por tanto, viola también este artículo.

Viola igualmente el artículo 48 de la Carta, ya que acorde al mismo *“la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de universalidad y solidaridad en los términos que establezca la Ley.*

Se garantiza a todos los habitantes el derecho a la irrenunciabilidad a la seguridad social.

4.2.2. VIOLACIÓN DE LA LEY COMO CAUSAL DE NULIDAD.

El artículo 12 de la Ley 797 de 2003 modifica el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, el cual establece quienes tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, de la siguiente manera:

“Artículo 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y, (...)”

El artículo 13 ibídem, reza lo siguiente:

“Artículo 13. Los artículos [47](#) y [74](#) quedarán así:

Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

(...)

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste”.

Al estudiar la Constitucionalidad de la mencionada norma, la Corte Constitucional concluyó que al establecer el legislador la pensión de sobrevivientes a favor de los hermanos discapacitados que dependían económicamente del Causante, no se vulnera la constitución, sino que por el contrario, se establece una discriminación positiva a favor de un grupo poblacional que puede verse en una desprotección y por tanto, una lesión a su mínimo vital cuando la persona que le suministraba lo necesario para su congrua subsistencia deja de existir.

Así, en la sentencia C-896 de 2006 se expresó:

“En varias oportunidades esta Corporación ha expresado que los derechos fundamentales de las personas discapacitadas son de aplicación inmediata. De igual modo, ha sostenido que el Estado tienen el deber de implementar medidas de diferenciación positiva a favor de las personas con discapacidad. En el caso del precepto bajo estudio, la protección de estas personas se pretende lograr precisamente a través de la introducción una acción afirmativa de tipo normativo, cuya finalidad es prevenir que la población inválida que dependía económicamente de sus hermanos, al fallecimiento de éstos, quede en completa desprotección. Así las cosas, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a su favor les permite al menos mantener el mismo nivel de seguridad económica con la que contaban antes del deceso del causante, en aras de la protección de su mínimo vital. Adicionalmente, al imponer límites al acceso a una prestación a cargo del sistema de pensiones, la disposición persigue una finalidad legítima, esta es, la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social,

del la cual depende la garantía de los derechos fundamentales de muchas personas. Esto, sumado al hecho de que la norma introduce una diferenciación positiva a favor de un sector de la población vulnerable, la cual es necesaria para garantizar su derecho al mínimo vital y promover su integración social, permite concluir que se trata de una medida razonable a la luz de la Constitución”.

Ahora, el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 enseña a qué personas se les considera “invalidas” para efectos de la pensión de sobrevivientes.

Tal dispositivo establece:

“ARTICULO. 38.-Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera *inválida* la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.

4.2.3. CASO CONCRETO.

Vista la anterior normativa, es claro que los actos administrativos están viciados de nulidad por el desconocimiento de la Constitución y la Ley.

Conforme al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes los hermanos inválidos que dependían económicamente del causante, siempre y cuando no sobreviva cónyuge o compañero permanente, padres o hijos.

La anterior situación se satisface plenamente en el presente caso.

De acuerdo al artículo 38 *Ibidem*, la norma considera inválida a una persona que haya perdido el 50% o más de su

capacidad laboral. Mi poderdante tiene una pérdida de la capacidad laboral reconocida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del valle del Cauca del 51,87%, estructurada desde el 21 de noviembre de 1973.

Ahora, en cuanto al monto de la misma el artículo 48 *Ibidem*, reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 832 de 1996 establece que en caso de muerte del pensionado, la pensión de sobrevivientes será igual al 100% de la pensión que aquél disfrutaba.

Así establece:

"ARTICULO. 48.-Monto de la pensión de sobrevivientes. Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 832 de 1996. **El monto mensual de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquél disfrutaba.**

El monto mensual de la pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación.

(...)"

Cumplidos como están todos los presupuestos legales para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, natural corolario resulta en el sub lite la prosperidad de las pretensiones.

V. PRUEBAS.

5.1. Aportadas.

1. Registro Civil de Nacimiento de Gerardo Daza Muñoz.
2. Copia de la cédula de Gerardo Daza Muñoz.
3. Registro Civil de Nacimiento de Nilda Daza Muñoz.
4. Copia de la cédula de Nilda Daza Muñoz.
5. Registro Civil de Matrimonio entre Nilda Daza y José Freider Caicedo.
6. Registro Civil de Defunción de José Freider Caicedo.
7. Registro Civil de Defunción de Nilda Daza.
8. Resolución No. 17031 del 19 de abril de 2006 por la cual se reconoce una pensión gracia.
9. Calificación de la invalidez del señor Gerardo Daza Muñoz de fecha 27 de mayo de 2013.
10. Declaración juramentada con fines extraprocesales rendida por Gerardo Daza Muñoz.
11. Declaración juramentada con fines extraprocesales rendida por Jacinto Daza Muñoz.
12. Resolución No. RDP 042022 del 10 de septiembre de 2013 por la cual se niega una pensión de sobrevivientes.
13. Resolución No. RDP 053941 del 22 de noviembre de 2013 por la cual se resuelve un recurso de apelación.
14. Liquidación de la mesada pensional y las mesadas adeudadas a favor de Gerardo Daza Muñoz.

5.2. Solicitadas.

Documentales.

Sírvase señor Juez, requerir a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, para que con destino a este expediente allegue copia íntegra, auténtica o autenticada del expediente administrativo u hoja de vida laborar perteneciente a la señora Nilda Daza de Caicedo quien en vida se identificó con la cédula No. 25.309.550 de Bolívar Cauca, contentivo de todos los antecedentes administrativos de este proceso.

Igualmente, se le hará saber que de conformidad con el artículo 175 del CPACA, es obligación del demandado aportar con la contestación de la demanda todas las pruebas que tenga en su poder.

Testimoniales.

Ruego comedidamente al Despacho, se sirva citar y hacer comparecer a su Despacho a las siguientes personas con el objetivo de que depongan todo en cuanto les consta sobre los hechos de la demanda, en especial la dependencia económica del señor Gerardo Daza respecto a la causante y la ayuda que esta le brindaba.

- Jesús Ariel Zúñiga Pérez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.627.478 de Bolívar Cauca.
- Olga Regina Daza Dorado, identificada con la cédula de ciudadanía No. 25.310.926 de Bolívar Cauca.

Los mencionados señores podrán ser citados a través del suscrito para efectos de economía procesal.

VI. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA.

Para efectos de estimar la cuantía sin que ello signifique renuncia a una liquidación superior, de conformidad con el inciso 5 del artículo 157 del CPACA, estimo la misma en monto de **TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/Cte** (\$33.833.316) de conformidad con lo siguiente:

AÑO	MESADA	No. MESES	TOTAL
2016	1.219.639,00	3	3.658.917,00
2015	1.142.293,00	12	13.707.516,00
2014	1.101.977,00	12	13.223.724,00
2013	1.081.053,00	3	3.243.159,00
		TOTAL	33.833.316,00

VII. ANEXOS.

1. Poder debidamente conferido para actuar dentro del presente proceso.
2. Los documentos relacionados como pruebas.
3. Copia de la demanda y sus anexos para traslado a la UGPP.
4. Copia de la demanda y sus anexos para traslado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
5. Copia de la demanda y sus anexos para traslado al Ministerio Público.
6. Copia simple de la demanda en medio físico y magnético para el Archivo del Despacho.

VIII. NOTIFICACIONES.

1. La Entidad demandada, podrá ser notificada en la Calle 19 No. 68A 18 en la ciudad de Bogotá. Email. contactenos@ugpp.gov.co
2. Mi poderdante, en el Barrio Cristo Rey, Bolívar Cauca. Cel 3122536025.
3. El Suscrito, en mi oficina de Abogado ubicada en la Calle 3 No. 9-37 de la ciudad de Popayán. Tel 8242091. Email normangranja@gmail.com

Del(a) Honorable Juez(a), con todo respeto,

NORMAN ADRIAN GRANJA GARCÉS

C.C. No. 1.061.741.302 de Popayán

T.P. No. 227.906 del C. S. de la J.